

EL REGRESO DEL PRI: ¿ANTE QUÉ DEBEMOS ESTAR PREPARADOS?

■ Juan Luis Hernández* ■

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) sigue siendo el único en el mundo que mantuvo una hegemonía de gobierno ininterrumpida a lo largo de 71 años. El Partido Comunista Chino lleva 63 años consecutivos gobernando al gigante asiático y parece ser el que puede superar el récord priista. Mientras eso sucede, el PRI ha comenzado a figurar en otro club muy reducido: los partidos hegemónicos que fueron echados del poder, pero que al poco tiempo lo recuperaron en las urnas.

Estamos hablando de un perfil de partidos que llamaremos *partidos hegemónicos*, cuya influencia y enraizamiento en la sociedad les permite ser enteramente protagonistas cuando son gobierno y cuando son opo-

* Es politólogo de la UIA-Puebla y candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Dirigió la carrera de Ciencias Políticas en la UIA-México. Fue director general académico y rector interino de la UIA-Puebla y fundador de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría de Análisis de la Realidad. Ha escrito cientos de artículos y varios libros sobre política en México. Es analista político en medios de comunicación.

sición. Algunos de esos partidos pertenecen al anterior bloque del Este dominado por la Unión Soviética. Algunos partidos comunistas que marcaron la vida de sus países en la segunda mitad del siglo XX, y que fueron desterrados del poder tras la *perestroika* y la *glasnot* de Mijail Gorbachov, así como por el efecto dominó de la caída del muro de Berlín, tuvieron capacidad para reconvertirse en la oposición no sólo ideológicamente, sino en su propio nombre para regresar al poder en un entorno más democrático.

Hablamos del Partido Obrero Unificado Polaco y del Partido Obrero Socialista Húngaro, ambos excomunistas, que volvieron a tomar las riendas presidenciales, si bien con otras siglas, pero con los mismos cuadros y estructura territorial y organizativa. Sólo estuvieron fuera cinco años del poder y lo recuperaron casi inmediatamente. Pero el caso similar al PRI lo tiene el Kuomintang (KMT), el partido que gobernó Taiwán 51 años ininterrumpidos, que fue expulsado del poder en 2000 y volvió ocho años después, con el mismo nombre.

¿Por qué regresan los partidos que marcaron la vida de un país durante más de medio siglo? ¿Por qué no fueron aniquilados, como ocurrió con buena parte de ellos en otras latitudes del mundo? ¿Por qué siguieron siendo competitivos en la oposición? ¿Qué aprendieron esos partidos en la oposición para gobernar de manera diferente a su primera etapa? ¿Es posible ver en su regreso una manera distinta de ejercicio del poder? ¿Se puede esperar una evolución e innovación de esos partidos en su regreso al poder?

Este artículo busca indagar algunas razones que expliquen el regreso del PRI a Los Pinos y, al mismo tiempo, identificar algunos escenarios esperables de su ejercicio de gobierno y concepción del poder en el marco de la segunda alternancia en la Presidencia de la República. El enfoque explicativo verá los enclaves autoritarios subnacionales como determinantes en el regreso del PRI, la yuxtaposición democracia/autoritarismo

como modelo tipo para ejercer el poder desde Los Pinos y una visualización de agenda democrática y democratizadora desde la sociedad civil para acompañar y vigilar el gobierno de Enrique Peña Nieto.

1. Peña Nieto: caso exitoso de un enclave autoritario subnacional

Como cualquier fenómeno sociopolítico, el regreso del PRI a la Presidencia de la República se explica por una multiplicidad de factores, imbricados e interrelacionados entre sí, de tal manera que no es fácil adjudicar a uno de ellos la variable determinante. Algunos de esos factores son el rendimiento del gobierno de Felipe Calderón, particularmente el fracaso estrepitoso de su guerra contra el narco, los réditos y déficits de los dos sexenios panistas; la percepción del electorado en torno al principal retador de Peña Nieto en las elecciones, Andrés Manuel López Obrador; el papel de apoyo y alianza de los grupos fácticos de poder (particularmente Televisa) a la candidatura del priista; la compra del voto, el tamaño organizativo y el despliegue territorial de los partidos (PRI nacional, PAN y PRD, regionales), entre otras dimensiones.

Sin embargo, este análisis propone una razón más estructural y a la vez funcional: el papel de los enclaves autoritarios subnacionales en el régimen político mexicano después de la alternancia del año 2000. Se entiende por *enclave autoritario* la existencia de un poder encarnado en un sujeto personal o colectivo, que se caracteriza por una concentración de poder político relevante, uso discrecional de recursos de todo tipo y que goza de un amplio margen de maniobra sin contrapesos importantes.

Después de 2000 el sistema político mexicano experimentó el empoderamiento de dos tipos de enclaves autoritarios: los gobernadores de los estados y el sindicato de maestros que encabeza Elba Esther Gordillo. Al primer tipo le llamamos subnacional en virtud de que representa la vida local y con la que los ciudadanos están más familiarizados. Al segundo,

también denominado grupo fáctico, se le ha estudiado lo suficiente como para afirmar que quizá sea el único enclave ganador a lo largo de los dos sexenios panistas, medido en términos de ingresos económicos, posiciones políticas gubernamentales e influencia en políticas públicas.

Los gobernadores de los estados ganaron una autonomía política en la última década como no la tenían desde la década de los años veinte del siglo pasado. Ya en el sexenio de Ernesto Zedillo, algunos gobernadores, como Roberto Madrazo, experimentaron la posibilidad de contravenir los intereses presidenciales por los propios sin tener grandes costos políticos. Mientras la presidencia imperial iba perdiendo terreno con sus facultades metaconstitucionales, los gobernadores iban ganando en libertad de agendas y empoderamiento local y regional.

Mientras transcurrían los años de los gobiernos federales panistas, un nuevo actor se fue dando a conocer, no sólo por su irrupción mediática en los canales de opinión pública nacional, sino por el nivel de conflictos locales nacionalizados y los embrollos en las arenas federales que se gestionaban en los niveles locales. Estos nuevos actores, los gobernadores, fueron creciendo en capital político, particularmente, por la concentración de poder que alcanzaron y el tipo autoritario de ejercicio gubernamental que los caracterizó.

De esta manera, supimos del escándalo del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, cuya participación en la violación de derechos humanos a la periodista y activista social Lydia Cacho llegó a la Suprema Corte. También conocimos la gestión del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz, y la manera como decidió reprimir el movimiento social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Pero también a lo largo de los años fueron saliendo datos a la luz pública de otros que gobernaban sus estados como si se trataran de feudos, territorios bajo la conducción de un solo actor político.

En el mapa de los enclaves autoritarios subnacionales, antes de las alianzas entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en algunos estados, en 2010, el PRI gobernaba Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Hidalgo, Sinaloa, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Campeche y Tabasco desde 1929, es decir, mantenía gobiernos de más de 80 años de manera ininterrumpida, y en Quintana Roo desde 1974, año en que fue erigido ese territorio como estado. El resto de las entidades, en los últimos años, experimentaron alternancia en la gubernatura, sea del PRI al PAN o del PRI al PRD.

Esta hegemonía priista en los estados es la que explica la estrategia electoral de las alianzas entre el PAN y el PRD que presentaron a los electorados subnacionales el dilema democracia/autoritarismo, ante la estridencia priista, por un lado, y de los sectores más radicales de PAN y PRD que hablaban de la incompatibilidad ideológica de la derecha y la izquierda unidas, por otro. Como se sabe, esa alianza PAN-PRD fue exitosa en Puebla, Sinaloa y Oaxaca y muy competitiva en Durango e Hidalgo. En julio de 2012 más de dos terceras partes de los estados ya habían experimentado algún tipo de alternancia, y en ciertas entidades como Morelos los votantes ya le habían dado la oportunidad a los tres partidos más grandes de México de dirigir los ejecutivos estatales.

Sin embargo, el principal hallazgo en los últimos 12 años es que, ya sea en los estados gobernados por el PRI desde 1929 o en aquellos con alternancia doble o triple, el ejercicio personal del gobernador tendía a ser el mismo: un afán por controlar casi o completamente las variables y los hilos del poder político. Es decir, los gobernadores recuperaron las facultades metaconstitucionales que tenía el presidente de la república para reeditarlas en sus entornos territoriales.

Y uno de esos enclaves autoritarios subnacionales típicos y representativos lo constituyó Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México. Algunas de las características de estos enclaves son

que el gobernador tiende a controlar la agenda de su congreso local, sea a través de la mayoría legislativa de su partido, o bien a través de la cooptación de legisladores de la oposición; busca controlar igualmente las decisiones de los poderes judiciales subnacionales, la mayoría de ellos con perfil político del partido gobernante. La integración de las cabezas de los órganos autónomos como los institutos electorales, las comisiones de derechos humanos y las recientes comisiones de transparencia obedecen a los intereses políticos de los ejecutivos estatales.

Los medios de comunicación locales están plenamente controlados por la publicidad gubernamental. Los incentivos para hacer y ejercer ciudadanía desde la sociedad están muy acotados. En varias entidades, ejercer ciudadanía es muy caro. Muchos activistas sociales corren el riesgo de ser asesinados por defender derechos humanos, los bosques, el agua. Pobladores que se oponen a alguna obra, sea un proyecto de una transnacional o el de un gobernador, terminan en la cárcel con delitos fabricados y una campaña de represión significativa.

Estos enclaves autoritarios subnacionales se caracterizan por tener diseños institucionales formalmente democráticos, pero en los entresijos del poder, en los ríos subterráneos de las relaciones de poder, es el autoritarismo el ADN que tipifica la manera en que los gobernadores asumen sus responsabilidades. El margen de maniobra de éstos se vio incrementado en un doble juego: por un lado, se volvieron jefes natos de sus bancadas parlamentarias, tanto las locales como las federales. En este juego, el gobernador comenzó a visualizar que su capital político local le podría permitir pensar en un empoderamiento en la política nacional.

De esta manera, los gobernadores sacaron provecho de sus bancadas en San Lázaro y los diputados federales de todos los partidos aprobaron iniciativas de ley y un marco de federalismo fiscal que enriqueció el margen de maniobra de los ejecutivos estatales. Por ejemplo, se aprobó que los excedentes petroleros fueran a parar a las arcas presupuestales de los

estados, se liberaron innumerables recursos federales hacia los gobiernos subnacionales, pero sin medidas legales que le siguieran la pista al dinero.

Años después de esta lógica, fueron saliendo las consecuencias de un poder ilimitado sin contrapesos. A mediados de diciembre de 2012, la deuda pública de estados y municipios asciende a cerca de 500 mil millones de pesos. ¿Cómo fue posible que los gobernadores contrajeran deudas públicas sin restricción alguna? ¿Por qué los diputados locales de todos los partidos fueron tan solícitos en permitir dicho endeudamiento? El caso de Humberto Moreira en Coahuila fue el prototipo de este ejemplo, pero qué mayor enclave autoritario que dejar el poder a un hermano como fue el caso.

Uno de los aspectos más relevantes de los enclaves autoritarios subnacionales es la posibilidad que da la concentración de poder político con el fin de entrar en la liga nacional. El gobernador Peña Nieto consiguió la candidatura presidencial de su partido a partir de tres ejes: campaña nacional mediática, control de una fracción importante de diputados federales priistas desde la cual hizo interlocución con Felipe Calderón, negociación con él de ciertas reformas y veto a otras; la concentración del enclave autoritario le permitió reunir el suficiente capital político para enfrentar el proceso interno de su partido y después el proceso constitucional.

El resultado de ello se pudo medir. En 2011, la Fundación Konrad Adenauer construyó un Índice de Desarrollo Democrático en el que se investigaron diversos indicadores relacionados con derechos políticos y libertades civiles, calidad institucional y eficiencia política, democracia de las instituciones y corrupción, en los 31 estados de la república mexicana y el Distrito Federal. El Estado de México, luego de cinco años de gobierno de Peña Nieto, ocupó el antepenúltimo lugar en el país en desarrollo democrático. Desde la represión de su gobierno al movimiento social de San Salvador Atenco, pasando por el elevado número de femi-

nicidios, la discrecionalidad en la administración de justicia con el caso de la niña Paulette y la cooptación de sus opositores partidistas más relevantes, se pudo apreciar qué tipo de ascenso político se estaba encaramando desde lo local.

El regreso del PRI a la Presidencia de la República es, en extremo, simbólico si vemos la personificación de quien lo condujo. En esencia, el triunfo de Peña y el PRI en las elecciones presidenciales es una suerte de “confianza” social a quien representa, cabalmente, el autoritarismo mexicano. El PRI no cambió en lo absoluto en los 12 años que estuvo en la oposición. Todo lo contrario, en los bastiones que siguió gobernando acrecentó y profundizó el autoritarismo, y con ello mantuvo viva la estructura clientelar y corporativa que le permitió eficacia electoral. El PRI no se reconvirtió en la oposición como sí lo hicieron ciertos partidos comunistas que regresaron socialdemócratas. Tampoco llevó a cabo un importante relevo generacional con figuras o grupos nuevos.

El PRI regresa con la estrella de uno de los grupos políticos más rancios y más emblemáticos del autoritarismo priista: el Grupo Atlacomulco. En la oposición no encabezó una agenda ni democrática ni democratizadora; no se distinguió por encabezar una agenda contra la corrupción, a favor de los derechos humanos o la importancia de poner al día a México frente al cambio climático o con estándares internacionales de educación.

El electorado, sea por compra del voto, por el hartazgo ante la violencia expandida en el sexenio de Calderón, por la novela que le hizo Televisa con la actriz Angélica Rivera, por la personalidad polarizante de López Obrador, regresó al PRI por activa o por pasiva, dándole una oportunidad más sin que éste se haya presentado a las urnas revestido de democracia o partido modernizador. El Latinobarómetro 2011 colocó a los mexicanos como los más escépticos y decepcionados por nuestra democracia, y encabezamos al subcontinente en baja convicción democrática. En este contexto, un enclave autoritario subnacional fue la pla-

taforma para llegar a la Presidencia y regresar al Dinosaurio a la escena central del poder. ¿Qué se puede esperar de ese retorno?

2. ¿Democracia con autoritarismo? Hacia un régimen bimodal

En los últimos años, cada vez más, los politólogos descubrimos cuánta razón tiene aquella frase que dice: la realidad siempre supera a la ficción. En México y en otros países del mundo la democracia cohabita con el autoritarismo, se codean, se entrelazan de una manera esquizofrénica, se emparentan y se complementan.

El 1 de diciembre, fecha en que tomó posesión Enrique Peña Nieto como presidente, ocurrieron tantos eventos litúrgicos de la política cuyos significados no terminamos de descifrar, pero que no son tampoco difíciles de percibir. Lo más visible del conjunto de esos acontecimientos es una aproximación a lo que puede ser el segundo régimen priista: autoritarismo con democracia o democracia con autoritarismo.

El discurso de toma de posesión de Peña Nieto en Palacio Nacional, en sí mismo, es casi impecable. Si apartamos por un momento a la persona que lo leyó y el partido al que pertenece, la pieza retórica es el mejor compendio de la agenda democratizadora más ambiciosa de los últimos años. Ahí están expresados, con claridad, las agendas y los anhelos de muchos actores, tanto partidistas como civiles y ciudadanos que en los últimos años han señalado un rumbo para México libre de poderes fácticos, más justo, menos impune, con capacidades económicas equitativas y avances sociales plenos.

Las 13 decisiones que dibujan un proyecto de gobierno más eficaz son, hasta ahora, el programa de gobierno más concreto que se haya diseñado para ser operado políticamente en los próximos meses. La firma del Pacto por México entre los tres partidos más grandes de México (PRI,

PAN y PRD) al día siguiente, con casi siete decenas de reformas políticas, económicas y sociales, parecería completar un escenario digno de tiempos nuevos en los que podría estar preparándose un cambio importante en México.

Pero, al mismo tiempo, se sucedían acontecimientos contradictorios en la calle. Miles de manifestantes tomaron diversos sectores de la ciudad de México para expresar repudio, malestar y protesta contra la personificación del nuevo gobierno, del regreso del PRI. Ahí pudieron identificarse múltiples actores colectivos, desde el movimiento universitario y estudiantil #YoSoy132, hasta el arcoíris de izquierda social como el Sindicato Mexicano de Electricistas, los movimientos sociales barriales y una mezcla muy interesante de nuevas identidades juveniles.

Hasta ahí nada nuevo en el último semestre, salvo que a media mañana la violencia entre ciertos manifestantes y distintos agrupamientos policiales, federales en San Lázaro, y locales en el centro histórico, logró construir una imagen colectiva inédita en la capital del país: una violencia expandida, irrefrenable e incontrolable. Los medios de comunicación, esos que llevaron de la mano a Peña Nieto a la Presidencia, mostraban ya una interpretación entre líneas: los violentos tomaron las calles destrozando todo a su paso, probablemente anarquistas y críticos de Peña Nieto y del PRI.

Con el paso de los días se fue construyendo un rompecabezas que aún no termina de completarse, pero que parece arrojar los siguientes datos. Ese 1 de diciembre fueron detenidos más de 100 jóvenes y decenas de adultos. Ninguno de ellos correspondientes al perfil de “anarquistas”. Los testimonios se agolparon. Más de 50 detenidos no estaban en el lugar de los hechos, pasaban por ahí, habían quedado para ir al cine, a comprar libros. Unos fueron detenidos dos horas después de los acontecimientos y se les acusó de flagrancia. La mayoría de los testimonios ubica a policías vestidos de civil haciendo detenciones, pero no a quienes se ensañaban

contra los policías uniformados, embozados y con armas de todo tipo, sino a quienes hacían protestas pacíficas o simplemente quedaron atrapados en la batalla campal.

Mientras Peña Nieto leía una agenda democrática para el siglo XXI en las calles parece que se sembraron “halcones” que rápidamente hicieron recordar aquel 10 de junio de 1971. En ese entonces, Luis Echeverría gobernaba México, y desde la regencia del Departamento del Distrito Federal decidieron enfrentar una protesta estudiantil pacífica con porros armados, “halcones” se les llamó, en la zona conocida como San Cosme. El resultado fue que en los siguientes 40 años no volvió a producirse un movimiento estudiantil o universitario que enfrentara al poder presidencial o a los símbolos emblemáticos del PRI, hasta que emergió el 11 de mayo una protesta inédita en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en la ciudad de México.

La aparente presencia de “halcones” sembrados en las protestas del 1 de diciembre despertó muy pronto las alarmas en la sociedad civil y en el análisis crítico en los medios. La acción represiva no se concentró en los ejecutores de la violencia, sino en los protestantes pacíficos y en un grupo significativo de inocentes que ni siquiera habían planeado algún tipo de acción social o política. El mensaje parecía muy claro. La construcción del discurso mediático también: los violentos pertenecen al movimiento #YoSoy132 o son personeros del movimiento de López Obrador.

Curiosamente los dos críticos más diáfanos de Peña y del regreso del PRI fueron señalados como responsables de la violencia. Ya Marx, en el *18 Brumario de Luis Bonaparte*, había puesto con claridad que desde la cúspide del poder se echa mano de los sótanos de la sociedad, del lumpenproletariado, con la finalidad de romper huelgas, tronar movimientos opositores y descalificar actores incómodos con sujetos violentos sin más incentivos que una paga que alivie algunas necesidades primarias.

La manera como reaccionaron las fuerzas represivas del Estado ese 1 de diciembre recordó los usos de la violencia del gobierno de Peña Nieto en Atenco, justo el capítulo que hizo estallar a algunos alumnos de la Universidad Iberoamericana en la alocución del mexiquense, quien se enorgullecía de “aplicar el Estado de Derecho”. Como el 2 de octubre de 1968, no es preciso que las fuerzas coercitivas del Estado estén de acuerdo con una estrategia, más bien es preciso que no se conozcan las unas a las otras, y que en el mejor de los casos haya un enfrentamiento entre sí teniendo como centro el ataque a los incómodos. Naturalmente esta hipótesis no tiene a la mano más recursos que aquellos que provienen del análisis de prospectiva y de escenarios, y que en los sucesos violentos del 1 de diciembre de 2012 caben otras hipótesis y, por lo mismo, otras conclusiones. Sin embargo, para este autor, el regreso del PRI es el regreso de la estrategia eficaz y contundente de la zanahoria y el garrote, de políticas democratizadoras y de políticas coercitivas.

¿Contradictorio? ¿Es posible democratizar y sostener prácticas autoritarias? La revisión del ejercicio del poder en las últimas dos décadas parece reunir evidencias de que es posible democratizar entornos institucionales, pero al mismo tiempo conservar enclaves autoritarios. Una de las miradas más interesantes sobre las transiciones latinoamericanas a la democracia es observar a los nuevos gobiernos surgidos de las urnas practicar con vehemencia la violencia policiaca. ¿Por qué reprimen las nuevas democracias? Pareciera ser que los entornos policiacos se habrían convertido en enclaves autoritarios que no acompañaron de la misma manera, ni al mismo ritmo, a otras instituciones estatales en su camino a protocolos más transparentes y menos discrecionales.

La agenda política en el regreso del PRI a Los Pinos atraviesa tres aspectos: un gabinete con promedio de edad de 63 años con un presidente de 47 años; un sector del gabinete con perfiles políticamente duros y experimentados en el arte de la disuasión por todos los medios y una

agenda programática para volver a poner a la Presidencia de la República en el centro del arbitraje político.

Esta agenda de volver a dotar al presidente de verdadero poder político manda el mensaje de que ningún poder fáctico, sean televisoras, sindicatos o cárteles de la droga, estarán por encima del Poder Ejecutivo. Eso no significa que tales poderes fácticos desaparezcan, sino que tendrían que esperar el arbitraje del señor presidente. Así se puede entender que las medidas contra los monopolios, tanto en telefonía como en televisión, serían sendas decisiones orientadas a poner más jugadores en el sector de telecomunicaciones y hacer menos influyente el chantaje de Carlos Slim o del duopolio Televisa-Televisión Azteca. Reformar el artículo 3° constitucional para hacer el ingreso, la promoción y el retiro de los maestros a partir del resultado de sus méritos y no de su trabajo sindical sería el “quinazo” a Elba Esther, no para encarcelarla, sino para bajar y acotar su poder.

Así como alguna vez Benito Mussolini dijera del fascismo (nada fuera del Estado, todo dentro del Estado, nadie contra el Estado), hoy se estaría fraguando un diseño político que recuperara, para la Presidencia, los controles centralistas para poner en orden a los gobernadores y presidentes municipales, meter en cintura a ciertos grupos fácticos que se le subieron a las barbas a los dos presidentes anteriores, pacificar el país con buena dosis de política, mucha política.

En suma, a juzgar por los primeros días de vida del segundo régimen priista, podemos esperar la puesta en marcha de una agenda agresiva en materia de modernización económica, con una gama amplia de políticas sociales y un diseño institucional de la arquitectura política para el siglo XXI, pero al mismo tiempo con las señales inequívocas de que a este régimen no le temblará la mano a la hora de enfrentar a sus críticos y opositores, con viejas y nuevas estrategias para acotarlos, limitarlos o, si son insistentes, focalizar la represión social.

3. Hacia una agenda desde la sociedad civil para vivir este gobierno

En las últimas semanas muchas personas en distintas partes de la república me han preguntado qué esperar del gobierno de Peña Nieto. Después de revisar los apartados anteriores, en realidad no hay que esperar nada de él. Lo que hay que ver es cómo se comporta la ciudadanía ante él, qué es capaz de hacer, qué organización social y política puede articular frente a él. Lo importante no es que nos sorprendamos de sus acciones y decisiones. Lo importante será que él y todos los suyos se sorprendan de la vitalidad, energía y movilidad de los ciudadanos que acompañarán su gobierno con criticidad, praxis, protesta y propuesta.

Ante el escenario de un gobierno que practica las artes de la zanahoria y el garrote, la coacción y la coerción, pensemos en una agenda política que recupere el camino a la consolidación democrática, una agenda que evite que los enclaves autoritarios que dejó la docena panista se conviertan en el estilo del régimen. Una agenda política cuyo centro sea la internalización de la democracia, la responsabilidad política, el ataque frontal a la desigualdad, la corrupción, la violencia y la impunidad con un modelo educativo de aprendizajes esperados.

3.1 Completar la reforma política

Será importante no cejar en la necesidad de seguir impulsando la reelección legislativa y de alcaldes. Los políticos tienen que depender más de sus votantes que de sus comités ejecutivos nacionales. Es tan importante esta llave que hasta ahora los políticos la han eludido. Ni siquiera las candidaturas independientes tienen el peso que puede tener la reelección legislativa y municipal en nuestro sistema político. Esta reforma tendrá que ir acompañada de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. No es posible seguir teniendo elecciones razonablemente competidas con

reglas y *modus operandi* que ni permiten al ganador tener un triunfo indiscutible ni tampoco permiten al perdedor aceptar la derrota con honor.

No podemos retrasar tampoco la discusión sobre nuestro régimen político. Nuestro sistema presidencial, aunado al sistema multipartidista que parece consolidado ya en México, da como resultado una democracia inestable. Demos el salto de construir un andamiaje institucional semipresidencial o semiparlamentario, otorgando al Ejecutivo un jefe de gabinete, incorporando a la Constitución la figura del jefe de la oposición a la segunda fuerza política más votada en elecciones presidenciales, un sistema que otorgue los incentivos políticos más justos y proporcionales a su peso en el electorado y que ello permita una interacción más legítima y legal entre las distintas fuerzas políticas.

La mayor parte de los mexicanos no está convencida de los beneficios de la democracia. Por ello requerimos esquemas de participación que permitan al ciudadano de a pie aproximarse a los cuartos de poder para intervenir en presupuestos participativos, en la elección de asuntos prioritarios barriales o municipales, en la discusión pública para plebiscito sobre legalizar o no la mariguana. Es preciso internalizar la democracia; la política y los asuntos públicos tienen que estar en los comedores de las casas y en la calle, así la vida pública la toman los ciudadanos, no los políticos.

3.2 Una agenda política para la política económica

Los últimos cuatro sexenios han sido más neoliberales que los propios neoliberales en países desarrollados. Este modelo es pródigo en entregar buenas cuentas macroeconómicas, pero jamás reflejarse en mejoras en la calidad de vida de las mayorías, particularmente de quienes están en la pobreza o en la pobreza extrema.

Aún más, el modelo neoliberal es perfecto para dar más a quienes ya tienen mucho y quitarles a quienes de hecho casi no tienen lo mínimo para subsistir. México se ha convertido en uno de los países más desiguales del mundo. Mientras que los últimos cuatro sexenios se han ufanado en crear políticas públicas contra la pobreza (Pronasol, Oportunidades, Progresá, Vivir Mejor, etc.) ninguna de ellas ha sido eficaz en reducir significativamente la masa de pobres, mucho menos en disminuir la desigualdad, porque sobre todo esto último no es el propósito de la política social.

Hasta ahora no hemos tenido una sola política económica ni social orientada para disminuir la desigualdad. Eso amerita una agenda política que esté concentrada en cinco grandes rubros:

- Diseñar una reforma fiscal que elimine los privilegios a los grandes grupos fácticos, amplíe la base gravable con un solo impuesto y construir con ello el financiamiento de un Estado de Bienestar equilibrado en tamaño con una sola plataforma de seguridad social.
- Dotar de independencia y autonomía totales a los órganos reguladores del Estado con capacidad para facilitar una economía sin monopolios, donde la competencia sea la regla del juego en todos los sectores, principalmente el de comunicaciones.
- Revisar la actual estructura de sueldos y salarios en México y migrar a una estructura más justa (no es posible tener a un dependiente tras mostrador de Sanborns que gana 2 400 pesos mensuales contra 150 mil pesos más bonos y demás de un diputado; ese es el tamaño de nuestra desigualdad).
- Implementar una ley nacional de desarrollo sustentable que tenga metas anuales para dejar atrás la dependencia del petróleo y asumir un modelo de energías limpias; contar con proyectos subnacionales preci-

sos que tengan una hoja de ruta para enfrentar las consecuencias del cambio climático; tener indicadores homologados en todo el país para aplicar en ciudades metropolitanas, en ciudades capitales y en ciudades pequeñas en materia de seguridad, movilidad, transporte público, derechos ciudadanos, recuperación de espacios públicos.

- Desterrar el cáncer de la corrupción y la irresponsabilidad de presidentes municipales y gobernadores que endeudan sus entidades con frenesí, con lo que nuestra economía será más sólida y sana. La autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y la institución que se encargue de perseguir la corrupción (la Comisión que propone Peña, la propia Auditoría Superior con nuevas atribuciones, u otra) en los tres niveles de gobierno tienen que hacer muy cara a los políticos la acción de corromper o ser corrompidos.

3.3 Una política de seguridad ciudadana

El nuevo gobierno tendrá que hacer cambios importantes en la fallida estrategia de Calderón contra el crimen organizado. Si Gobernación albergará la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entonces deberá tener controles democráticos. El gobierno de Peña ha de enfocarse no en la seguridad pública sino en la seguridad ciudadana, es decir, poner a los derechos humanos como el centro de cualquier política hacia los criminales organizados

Una nueva política contra el crimen organizado debe tener a las víctimas de la violencia —tanto de los criminales como de los efectivos coercitivos del Estado desorientados— como el centro de sus políticas para la reparación del daño, de recuperación del tejido social y de acotamiento de la impunidad. El nuevo gobierno tendrá que tejer con la sociedad civil, los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión una verda-

dera política de Estado contra las mafias en México, una política no politizable, con responsabilidades compartidas desde los municipios, con una educación preventiva contra las drogas y un enfoque de salud pública con inteligencia en la Secretaría de Hacienda que persiga el dinero ilegal.

Todavía muchos se preguntan quién es en realidad Peña Nieto, qué piensa y, sobre todo, qué va a hacer. Pero mientras lo averiguamos, esta agenda puede ser una plataforma para seguir empujando desde abajo y con muchos actores la necesidad de no dejar un minuto solo al nuevo gobierno, que tenga nuestra cercanía y nuestra mirada, nuestra protesta y nuestra propuesta.